

Diario de Centro América

ORGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.

VIERNES 31 de enero de 2014 No. 85 Tomo CCXCVIII

Director General: Héctor Salvaterra

www.dca.gob.gt

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ:

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdase emitir la siguiente: REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 273-98 DE FECHA 22 DE MAYO DE 1998, REGLAMENTO DE TRÁNSITO.

Página 1

Acuérdase emitir la reforma siguiente: REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 529-99 DE FECHA 20 DE JULIO DE 1999, REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

Página 2

Acuérdase reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas de la Iglesia denominada IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN CRISTIANA SAN JUAN 3:16.

Página 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Acuérdase crear el: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES QUE LABORAN EN LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO.

Página 3

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Acuérdase declarar el día 30 de enero de cada año, como el "Día del Ingeniero".

Página 4

PUBLICACIONES VARIAS

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL DIRECCIÓN GENERAL LIBRO DE ACUERDOS

ACUERDO No. 01-2014

Página 5

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

EXPEDIENTE 3898-2012

Página 6

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RESOLUCIÓN CNEE-35-2014

Página 11

RESOLUCIÓN CNEE-36-2014

Página 12

ANUNCIOS VARIOS

- Matrimonios	Página 13
- Líneas de Transporte	Página 13
- Constituciones de Sociedad	Página 14
- Modificaciones de Sociedad	Página 15
- Disolución de Sociedad	Página 15
- Registro de Marcas	Página 15
- Títulos Supletorios	Página 18
- Edictos	Página 19
- Remates	Página 23
- Convocatorias	Página 24

ORGANISMO EJECUTIVO



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdase emitir la siguiente: REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 273-98 DE FECHA 22 DE MAYO DE 1998, REGLAMENTO DE TRÁNSITO.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 35-2014

Guatemala, 30 de enero de 2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como principio fundamental del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 102-2011 de fecha 31 de enero de 2011, se declaró como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación a "LA CARAVANA DEL ZORRO", por constituir una tradición de fervor religioso y un movimiento que recoge manifestaciones sociales, culturales y económicas, la cual se realiza año con año el primer sábado del mes de febrero, en una peregrinación en motocicleta hacia la Capital de la Fe, para visitar la imagen del Cristo de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula.

CONSIDERANDO

Que por lo anteriormente considerado, es necesario reformar el Acuerdo Gubernativo Número 273-98 de fecha 22 de mayo de 1998, que contiene el Reglamento de Tránsito, con el objeto de normar lo relativo a la excepción al uso del chaleco para los conductores de motocicletas y motobicicletas y sus acompañantes, que participen en La Caravana del Zorro. Por lo anterior, debe dictarse la disposición legal correspondiente.

POR TANTO

En el ejercicio que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 27 literal j) del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; y 4 y 5 del Decreto Número 132-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Tránsito.

ACUERDA

Emitir la siguiente:

REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 273-98 DE FECHA 22 DE MAYO DE 1998, REGLAMENTO DE TRÁNSITO.

ARTÍCULO 1. Se adiciona el artículo 48 QUÁTER, con la redacción siguiente:

"ARTÍCULO 48 QUÁTER. EXCEPCIÓN AL USO DEL CHALECO. Se exceptúa de la obligación establecida en la literal a) del artículo 48 TER de este Reglamento a los conductores de motocicletas y motobicicletas y sus acompañantes, que participen en la denominada "La Caravana del Zorro", la cual se realiza anualmente el primer sábado y domingo del mes de febrero, y que consiste en una peregrinación de la ciudad capital hacia el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula.

El Departamento de Tránsito, debe coordinar con las Policías Municipales de Tránsito y entidades públicas y privadas que corresponda, y con el apoyo del Tercer Viceministerio de Gobernación, la elaboración de un plan para la prevención y seguridad vial en la realización de esa actividad cada año."

ARTÍCULO 2. VIGENCIA. El presente Acuerdo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.



COMUNÍQUESE

OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA

Héctor Mauricio López Bonilla
Ministro de Gobernación

Lic. Gustavo Adolfo Martínez Luna
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

(E-113-2014)-31-enero



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdase emitir la reforma siguiente: REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 529-99 DE FECHA 20 DE JULIO DE 1999, REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 30-2014

Guatemala, 30 de enero de 2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, es función del Ministerio de Gobernación, administrar el registro, control y documentación de los movimientos migratorios, función que realiza a través de la Dirección General de Migración.

CONSIDERANDO

Que es necesario financiar programas de seguridad migratoria, para que la Dirección General de Migración cuente con un sistema para el control fronterizo con registros biométricos e información digitalizada de los documentos de personas nacionales y/o extranjeras, que ingresan y egresan del país, que haga posible confirmar con exactitud su identificación para garantizar la autenticidad de los documentos de viaje que porta, por lo que es necesario crear el registro y documentación del control migratorio con su respectivo valor.

POR TANTO

En el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal c) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, Decreto Número 95-98 del Congreso de la República,

ACUERDA

Emitir la reforma siguiente:

REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 529-99 DE FECHA 20 DE JULIO DE 1999, REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

ARTÍCULO 1. Se adiciona al artículo 88 en el apartado "otros" la literal j) la cual queda así:

"j) Registro y documentación del control migratorio, quince dólares (US\$15.00), aplica a las personas nacionales y/o extranjeras que ingresen o egresen del territorio de la República de Guatemala, exclusivamente por vía aérea; este valor se incorporará al costo total del pasaje aéreo."

ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo, empieza a regir ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América.



COMUNÍQUESE

OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA

Lic. Gustavo Adolfo Martínez Luna
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Héctor Mauricio López Bonilla
Ministro de Gobernación

(E-111-2014)-31-enero



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdase reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas de la Iglesia denominada IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN CRISTIANA SAN JUAN 3:16.

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 37-2014

Guatemala, 16 de enero de 2014

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN

CONSIDERANDO:

Que la persona designada por la Junta Directiva Provisional de la Iglesia denominada IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN CRISTIANA SAN JUAN 3:16, con sede en el municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala, se presentó a éste Ministerio solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica y aprobación de bases constitutivas de su representada.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce que el ejercicio de todas las religiones es libre. Que toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 37 de la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y que las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica, conforme las reglas de su institución y que el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público.

CONSIDERANDO:

Que el instrumento público en que constan las bases constitutivas de la Iglesia denominada IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN CRISTIANA SAN JUAN 3:16, cumple con los requisitos de Ley y las directrices dictadas por este Ministerio, y contándose con la opinión favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio y Visto Bueno de la Procuraduría General de la Nación, es procedente emitir la disposición Ministerial correspondiente.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 37, 194 literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literal m) y 36 literal b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República y sus reformas; y, 4 y 7 numeral 4 del Acuerdo Gubernativo 635-2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Gobernación; y, con fundamento en los artículos 15 numeral 1º y 31 segundo párrafo del Código Civil, Decreto Ley 106 y sus reformas; y, Acuerdo Gubernativo número 263-2006, Disposiciones para la Obtención del Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las Iglesias Evangélicas.


ACUERDA:


ARTÍCULO 1. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas de la Iglesia denominada **IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN CRISTIANA SAN JUAN 3:16**, la cual está contenida en el Instrumento Público número ochenta y uno (81) de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil trece (2013), ampliado por el Instrumento Público número ciento cincuenta y tres (153) de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil trece (2013), ambos autorizados en la ciudad de Guatemala, por el Notario Marco Tulio Mérida Cifuentes.


ARTÍCULO 2. Para el funcionamiento de cualquier proyecto o programa de los no contemplados dentro de sus fines y cualquier otra modificación a sus bases constitutivas, la Iglesia denominada **IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN CRISTIANA SAN JUAN 3:16**, deberá contar con la autorización previa de la entidad Gubernativa correspondiente.


ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE.


Héctor Mauricio López Bonilla
Ministro de Gobernación


Lic. Manfred Viniño Pacheco Cosuegra
Segundo Viceministro
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN





(372073-2)-31-enero

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

Acuérdase crear el: **PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES QUE LABORAN EN LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO.**

ACUERDO MINISTERIAL No. 191-2014

Guatemala, 17 de enero de 2014

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad, cultura nacional y universal. Asimismo, la Ley de Educación Nacional, establece que el Ministerio de Educación es la institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas, determinadas por el Sistema Educativo del país.

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Educación por medio del Acuerdo Ministerial número 3409-2011 de fecha 30 de noviembre de 2011, aprobó las Políticas Educativas del país propuestas por el Consejo Nacional de Educación, y el artículo 3, literal d) preceptúa el fortalecimiento de la formación, evaluación y gestión del recurso humano del Sistema Educativo Nacional.

CONSIDERANDO:

Que, la implementación de la Estrategia para una Educación de Calidad para la Niñez y Juventud Guatemalteca, instaurada por el Ministerio de Educación, requiere la formación y actualización de los docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado a nivel nacional, por medio de un diplomado acreditado por una Universidad, que les permita integrar enfoques, temáticas y diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje para la entrega educativa congruentes con el Currículo Nacional Base -CNB-. La emisión del presente Acuerdo Ministerial es de estricto interés del Estado y como consecuencia la publicación deberá efectuarse sin costo alguno.

POR TANTO:

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 194, literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literales c) y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; 33 literal d), 36 literales d) y g), 66 y 67 de la Ley de Educación Nacional, Decreto número 12-91, del Congreso de la República de Guatemala.

ACUERDA:

Crear el:

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES QUE LABORAN EN LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO

ARTÍCULO 1. Definición del Programa. El Programa está dirigido a personal docente que labora en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado a nivel nacional, que participan en la Estrategia para una Educación de Calidad para la Niñez y Juventud Guatemalteca, en la implementación del Currículo Nacional Base -CNB- en el aula.

ARTÍCULO 2. Objetivos del Programa. El Programa tiene los objetivos siguientes:

- Fortalecer las competencias docentes para el diseño, ejecución, evaluación, investigación y mejora de la práctica pedagógica en el aula.
- Aplicar en el aula los enfoques, estrategias de enseñanza y aprendizaje actualizados, congruentes con el Currículo Nacional Base -CNB-.
- Innovar las prácticas pedagógicas en el aula para la entrega del Currículo Nacional Base -CNB- con la utilización de tecnologías para el aprendizaje, manuales físicos, digitales y otros recursos pedagógicos en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado a nivel nacional.

ARTÍCULO 3. Normativa del Programa. El Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado a nivel nacional, estará a cargo de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa -DIGECADE- y la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI-, que serán responsables de:

- Emitir las normas, lineamientos o directrices que deberán atender las Direcciones Departamentales de Educación para la ejecución del Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado de su jurisdicción.
- Asesorar al personal de las Direcciones Departamentales de Educación, sobre la ejecución del Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado.
- Realizar el monitoreo y seguimiento a la ejecución del Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado, en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación, para garantizar que se apege a la normativa legal que la rige y con criterios de transparencia, racionalidad, probidad y calidad del gasto, en beneficio de la comunidad educativa.

ARTÍCULO 4. Características del Programa. El Programa tiene las características siguientes:

- Dirigido a personal docente que labora en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado a nivel nacional, que participan en la Estrategia para una Educación de Calidad para la Niñez y Juventud Guatemalteca.
- Formación a nivel superior con acreditación universitaria de Diplomado, se requiere que el docente participante cumpla con una asistencia mínima del 80 % de las sesiones programadas.
- El Diplomado será desarrollado en forma semi-presencial que incluye reuniones de tutoría presencial una vez al mes.
- El Ministerio de Educación otorgará al docente como transferencia directa por boca, el pago de los estudios en la Universidad y aplicará el registro contable en el grupo de gasto correspondiente.
- El pensum de las Universidades estará acreditado por el Ministerio de Educación para que satisfaga la demanda de la actualización docente, de acuerdo con el Currículo Nacional Base -CNB-.

ARTÍCULO 5. Requisitos de ingreso al Programa. Los requisitos de ingreso al Programa, son los siguientes:

- Laborar como docente bajo los renglones 011 o 022 en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado a nivel nacional, que imparten las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación, Educación Musical, Educación Física y Productividad y Desarrollo a nivel nacional.
- Completar las formalidades de inscripción en la Universidad acreditada que corresponda de acuerdo a la cobertura educativa de la misma.
- Firmar carta de compromiso de participación ante el Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 6. Especificaciones Organizacionales y Procedimentales del Programa. El Programa será desarrollado en módulos educativos, conformados por los componentes siguientes:

- Componente Virtual. El cual incluye el trabajo semanal de un promedio de diez (10) horas que suma un total de 290 horas, de conformidad con los elementos organizacionales y procedimentales del Diplomado.
- Componente Presencial. El profesor - estudiante contará con la asistencia técnica presencial de un tutor, con una duración de cuatro (4) horas, las que en total suman 32 horas, que se realizan al inicio de cada módulo.

ARTÍCULO 7. Costos del Programa. El Ministerio de Educación asignará los recursos presupuestarios y financieros en las partidas presupuestarias que correspondan, para que se realice la transferencia o aporte a los docentes que se matriculen en el Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado.

ARTÍCULO 8. Delegación. Se delega en los Directores Departamentales de Educación para que en representación del Ministerio de Educación, suscriban las cartas de compromiso con los docentes que participarán en el Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado.

ARTÍCULO 9. Programación, Ejecución Presupuestaria y Financiera del Programa. Las Direcciones Departamentales de Educación serán responsables de la programación, ejecución presupuestaria y financiera del Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales de Nivel Medio, Ciclo Diversificado bajo los renglones presupuestarios 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por contrato", de conformidad con la cantidad de docentes que se matriculen en el Programa y que correspondan a su jurisdicción.

ARTÍCULO 10. Responsabilidad sobre la Programación, y Ejecución Presupuestaria y Financiera del Programa. Las Direcciones Departamentales de Educación como responsables de la planificación, formulación y programación de la ejecución presupuestaria y financiera correspondiente al Programa de Actualización para Docentes, que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio ciclo Diversificado, las cuales deberán cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial número 177-2009 de fecha 30 de enero de 2009.

ARTÍCULO 11. Control, Seguimiento y Monitoreo del Programa. Las Direcciones Departamentales de Educación por medio de la Subdirección/Departamento Técnico Pedagógico y/o Subdirección/Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural, serán responsables de:

- Coordinar y realizar las gestiones necesarias para la ejecución del Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales del Sector Oficial del Nivel Medio, Ciclo Diversificado, en su jurisdicción.
- Dirigir, acompañar y dar seguimiento a la ejecución del Programa, en su jurisdicción.
- Evaluar y dar seguimiento a la gestión administrativa del Programa, en su jurisdicción.
- Consolidar y brindar información al Despacho Superior del Ministerio de Educación sobre la administración y ejecución del Programa en su jurisdicción.
- Verificar el cumplimiento de los compromisos que adquieren los docentes que participen en el Programa, así como certificar que pueden realizarse los desembolsos de recursos financieros para que éstos realicen el pago correspondiente a las Universidades en que se encuentren matriculados.
- Verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de las Universidades en cuanto a los aspectos técnico-pedagógicos del Programa, en su jurisdicción.

ARTÍCULO 12. Fiscalización del Programa. La Dirección de Auditoría Interna -DIDAI- del Ministerio de Educación, será responsable de incluir en su Plan Anual de Auditoría -PAA-, las auditorías que considere necesarias en las Direcciones Departamentales de Educación, para evaluar los procesos operativos, administrativos y financieros relacionados con la ejecución del Programa de Actualización para Docentes que laboran en los Institutos y Escuelas Normales Oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado.

Los resultados de las auditorías deberán ser presentados oportunamente al Despacho Superior del Ministerio de Educación y, en el caso de hallazgos formular la acción de recomendación o acción correctiva correspondiente.

ARTÍCULO 13. Compromiso de los Beneficiarios del Programa. Los docentes que se matriculen en el Programa firmarán una carta compromiso por medio de la cual, adquirirán responsabilidades ante el Ministerio de Educación en compensación a la erogación que se hará por el costo del Diplomado.

ARTÍCULO 14. Casos no Previstos. Cualquier caso no previsto, será resuelto por el Despacho Superior del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 15. Vigencia. El presente acuerdo empieza a regir el día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNÍQUESE.

CINTHYA CAROLINA DEL ÁGUILA MENDIZÁBAL

LOS VICEMINISTROS DE EDUCACIÓN

OLGA EVELYN AMADO JACOB DE SEGURA ALFREDO GUSTAVO GARCIA ARCHILA

GUTBERTO NICOLÁS LEIVA ALVAREZ ELIGIO SIGÜEPANCOC



MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Acuérdose declarar el día 30 de enero de cada año, como el "Día del Ingeniero".

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 36-2014

Guatemala, 30 de enero de 2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce a los Colegios Profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país, así como al mejoramiento del nivel científico y técnico cultural de las profesiones universitarias.

CONSIDERANDO

Que en reconocimiento a los profesionales agremiados en el Colegio de Ingenieros es justo declarar el día 30 de enero de cada año, como "Día del Ingeniero".

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Se declara el día 30 de enero de cada año, como el "Día del Ingeniero".

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo empieza a regir a los ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNÍQUESE



[Firma manuscrita]

OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA

[Firma manuscrita]
Alejandro Sinibaldi
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

[Firma manuscrita]
Lic. Fredy Mario Martínez Luna
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PUBLICACIONES VARIAS



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

DIRECCIÓN GENERAL

LIBRO DE ACUERDOS

ACUERDO No. 01-2014

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto ciento veintinueve guión noventa y siete (129-97), del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Servicio de Defensa Penal, el Instituto de la Defensa Pública Penal goza de autonomía funcional y total independencia técnica para el cumplimiento de sus funciones y de acuerdo a las leyes de la materia, las Entidades Autónomas establecerán su propio sistema presupuestario.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo diez (10) del Decreto ciento uno guión noventa y siete (101-97) "Ley Orgánica del Presupuesto", el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de la Defensa Pública Penal para el presente Ejercicio Fiscal, debe disponer de la totalidad de las asignaciones presupuestarias destinadas a sufragar los gastos y la estimación de los recursos destinados para su financiamiento.

CONSIDERANDO

Que debido a que no fue aprobado por el Congreso de la República el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2014, registró el monto del presupuesto asignado contenido en el Decreto número treinta guión dos mil doce (No. 30-2012) del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el día ocho de noviembre de dos mil doce, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece", en su Artículo cinco (5), aprueba el aporte a favor del Instituto de la Defensa Pública Penal por CIENTO VEINTISEIS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q126,000,000.00), dentro del rubro de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, con financiamiento proveniente de ingresos corrientes, y que además, la programación debe responder a la metodología presupuestaria por resultados, requeridas por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio del sistema de gestión.

POR TANTO

Con fundamento en los considerandos anteriores y lo que establecen los Artículos veinticuatro (24) del Decreto Ciento Uno Guión Noventa y Siete (101-97) Ley Orgánica del Presupuesto y doce (12), numeral ocho (8) del Decreto número ciento veintinueve guión noventa y siete (129-97) Ley del Servicio Público de Defensa Penal, ambos del Congreso de la República de Guatemala:

ACUERDA

PRIMERO: DE LOS INGRESOS. Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto de la Defensa Pública Penal para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 126,000,000.00), provenientes de ingresos corrientes, distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	APROBADO	TOTAL
Transferencias Corrientes	Q 126,000,000.00	
Del Sector Público	Q 126,000,000.00	
Transferencias de la Administración Central	Q 126,000,000.00	Q 126,000,000.00
TOTAL	Q 126,000,000.00	

SEGUNDO: DE LOS EGRESOS. Aprobar el Presupuesto de Egresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 126,000,000.00), distribuidos de la forma siguiente:

GRUPO	NOMBRE	FUENTE 11 Q.
000	Servicios Personales	102,853,282.00
100	Servicios no Personales	18,134,798.00
200	Materiales y Suministros	3,627,520.00
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	
400	Transferencias Corrientes	1,529,400.00
900	Asignaciones Globales	10,000.00
	TOTAL	126,000,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		TOTAL Q.
1	Dirección y Coordinación	37,492,725.84
11	Defensa Pública de procesos penales	81,231,386.16
12	Asistencia Legal a la Víctima y a sus Familiares	7,275,908.00
	TOTAL	126,000,000.00

TERCERO: Aprobar la estructura presupuestaria del Instituto de la Defensa Pública Penal, en congruencia con la metodología presupuestaria por resultado.

CUARTO: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. La Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, se registrará por lo normado en el Decreto Ciento Uno guión Noventa y Siete (101-97) Ley Orgánica de Presupuesto y sus modificaciones, Acuerdo Gubernativo Quinientos Cuarenta guión Dos Mil Trece (540-2013) Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, que sean compatibles con la estructura jerárquica y funcional de la institución, las normas de ejecución presupuestaria contenidas en el presente Acuerdo y otras leyes vigentes que sean aplicables.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE RECURSOS HUMANOS, COORDINACIONES, UNIDADES DE APOYO Y UNIDAD EJECUTORA. Los jefes responsables de las Áreas Administrativas, Recursos Humanos, Coordinaciones, Unidades de Apoyo y Unidad Ejecutora, deben velar por el cumplimiento de las metas de trabajo y por la utilización de los créditos presupuestarios que para este fin les sean asignados en el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2014. El presupuesto está bajo la responsabilidad del Departamento Financiero.

SEXTO: ANTICIPO DE RECURSOS. En la ejecución de las asignaciones aprobadas en el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio Fiscal 2014, únicamente podrá anticipar recursos para los siguientes casos:

- Devengar y pagar, mediante el fondo rotatorio
- Contratistas, con base en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Viajes y gastos de representación al exterior de conformidad con el reglamento vigente.

SÉPTIMO: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO. La distribución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, se realizará en los primeros días del mes de enero del año dos mil catorce, a nivel de programa, grupo y renglón de gasto presupuestario, consistente en la presentación desagregada autorizada mediante Acuerdo de Dirección General. Se anexa como parte del presente Acuerdo la distribución por renglón presupuestario.

OCTAVO: EJECUCIÓN DEL GASTO POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA. En la medida de lo posible todo gasto deberá ser imputado a la región geográfica que corresponda según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Cuando por razones administrativas no se pueda clasificar con precisión o ante la falta de información, se utilizará el código geográfico "Multirregional 3000".

NOVENO: ASIGNACIONES INDICATIVAS DE GASTO. La ubicación geográfica no constituye el límite del gasto, siempre y cuando exista saldo presupuestario a nivel del mismo renglón de gasto, dentro de cada programa o categoría equivalente, proyecto o actividad. Las regularizaciones presupuestarias serán propuestas por la Sección de Presupuesto ante el Jefe del Departamento Financiero, para tramitar su aprobación y posterior traslado a la Dirección Administrativa Financiera. Las regularizaciones se harán en base a la solicitud de la

dependencia interesada o bien por iniciativa propia del Departamento Financiero, como ente rector de la administración presupuestaria.

DÉCIMO: DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. Todas las modificaciones presupuestarias que se requieran efectuar entre renglones presupuestarios, y entre grupos presupuestarios, deberán ser presentadas a solicitud de la unidad administrativa, debidamente justificadas y firmadas por el jefe de la unidad administrativa, deberá ser presentada al Departamento Financiero por el Jefe de la Sección de Presupuesto, para su registro en el Sistema Financiero SIAF-SICOIN-WEB, y autorizadas mediante la emisión de resolución de la siguiente manera:

- Las transferencias entre grupos presupuestarios, incluyendo modificaciones del Grupo 0-Servicios Personales, serán autorizadas por la Dirección General del Instituto.
- Transferencias entre renglones presupuestarios dentro de un mismo grupo, serán autorizadas directamente por el Jefe del Departamento Financiero y la Directora de la División Administrativa Financiera de la institución.
- Las transferencias a nivel de programas presupuestarios, entre renglones del mismo grupo y entre distintos grupos presupuestarios, incluyendo modificaciones del Grupo 0-Servicios Personales, serán autorizadas por la Dirección General del Instituto. El solicitante de la unidad administrativa, deberá indicar si tiene o no incidencia en las metas actuales y si las tiene, deberá indicar el cambio de metas correspondiente e informar al Departamento de Planificación para su regularización.
- En caso del Préstamo BID 1905/OC-GU será la Unidad Ejecutora que aprueba y gestionará sus propias modificaciones presupuestarias, y realizará los registros correspondientes en el SICOIN, cumpliendo con estas normas, y las regulaciones externas aplicables y del ente cooperante.
- Queda prohibido realizar transferencias entre fuentes de financiamiento o entre renglones presupuestarios de diferentes fuentes de financiamiento; esta norma persigue el control y para mantener la transparencia de la ejecución presupuestaria.

DÉCIMO PRIMERO: SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO. Complementariamente a lo dispuesto en el numeral anterior del presente Acuerdo, se faculta al Departamento Financiero para que a través de la Sección de Presupuesto proponga las modificaciones presupuestarias que considere necesarias para el buen funcionamiento operativo del Instituto. La Defensa Pública Penal, siempre debiendo contar con las aprobaciones indicadas en el numeral antes indicado.

DÉCIMO SEGUNDO: DE LAS DONACIONES Y PRÉSTAMOS. Las transferencias y/o modificaciones presupuestarias que se realicen con recursos provenientes de donaciones y/o Préstamos, se sujetan a lo establecido en los convenios suscritos con los donantes y/o entidades cooperantes, y serán autorizadas de acuerdo con el procedimiento contenido en el numeral décimo. Las donaciones en especie recibidas, deberán ampararse en el acta correspondiente, al estar cumplidas las normativas y procedimientos respectivos de legalización de este tipo de donaciones, serán aprobadas por medio de Acuerdo de Dirección General, debiendo registrarse en el Sistema Financiero SIAF-SICOIN-WEB del Instituto, cuando proceda.

El Departamento de Planificación, Departamento de Cooperación Externa y La Unidad Ejecutora del Préstamo BID 1905/OC-GU, según corresponda, son responsables del cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la formulación, gestión, ejecución y liquidación de los programas del BID y otros proyectos de cooperación interna o externa, reembolsables o no reembolsables, así como presentando y Programación de avance físico y financiero en el SICOIN, mediante el Sistema Nacional de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, y otras entidades de conformidad con el procedimiento interno establecido y otros regulaciones aplicables.

La Unidad Ejecutora del Préstamo BID 1905/OC-GU, es responsable directo de realizar los registros de programación, ejecución, modificación y liquidación presupuestaria en el Sistema de Gestión -SIGES- y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, así como realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones, registro y seguimiento de proyectos en el SICOIN, mediante el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-; además, deberá cumplir con la presentación de informes y todas regulaciones incluidas en estas normas y otras leyes y regulaciones aplicables.

DÉCIMO TERCERO: EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA. El Departamento Financiero, con base en la información del SICOIN-WEB, presentada por la Sección de Presupuesto, elaborará una evaluación de la ejecución presupuestaria y de las proyecciones financieras, que serán presentadas a consideración de la Dirección Administrativa Financiera, para que adopte las medidas de manera oportuna que el caso amerite e informe a la Dirección General. La Unidad Ejecutora del Préstamo BID1905/OC-GU deberá presentar directamente sus informes y/o evaluaciones a la Dirección General para su consideración y efectos correspondientes.

DÉCIMO CUARTO: INFORME CUATRIMESTRAL. En los meses de mayo, septiembre y enero el Departamento Financiero elaborará los informes de ejecución presupuestaria analítico y se presentarán a más tardar 20 días hábiles siguientes de concluido cada periodo a consideración del honorable Congreso de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas.

El Departamento de Planificación deberá realizar el control y seguimiento respectivos, bajo esta nueva estructura presupuestaria, de los productos y resultados asociados, así como, preparar los informes de avance físico cuatrimestrales, en los plazos establecidos.

La Unidad Ejecutora del Préstamo BID 1905/OC-GU, deberá realizar directamente los informes específicos de avance físico y financiero del proyecto, por intermedio del Departamento de Planificación.

DÉCIMO QUINTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. El Departamento Financiero a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil quince, presentará la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del año 2014 al Congreso de la República de Guatemala, al Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas. En esta liquidación se hará un minucioso análisis de la situación financiera y económica de la institución. La Unidad Ejecutora del Préstamo BID 1905/OC-GU elaborará de forma complementaria su informe de liquidación presupuestaria y contable del proyecto.

DÉCIMO SEXTO: REGISTRO DE EGRESOS. Todos los egresos que se realicen en el año dos mil catorce, serán ejecutados a través de la emisión de un orden de compra, CUR y/o con cargo al Fondo Rotativo institucional autorizado para el efecto; en ambos casos se debe contar con el documento legal de respaldo correspondiente, deberá especificar como mínimo quién, qué, cómo, cuándo y para qué se está ejecutando el gasto. Se exceptúan los pagos que se realizan con cargo a Cuentas por Pagar, por haber sido ejecutados en presupuestos de ejercicios anteriores, en este caso se emitirá el CUR contable correspondiente.

Se prohíbe efectuar pagos del Subgrupo 18 "Servicios Técnicos Profesionales" a través de planillas, ejecutándose pagos únicamente por producto.

DÉCIMO SÉPTIMO: DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS. La disminución de caja y bancos de ingresos propios establecida al momento de liquidar el presupuesto del año dos mil trece, será debidamente incorporado al presupuesto de ingresos y egresos del año dos mil catorce, y se operará como fuente de financiamiento distinta al manejo de los recursos provenientes del Gobierno Central.

Deberán distribuirse a nivel de programas, grupo presupuestario y autorizado mediante Acuerdo de la Dirección General, que será publicado en el Diario de Centro América, y se registrará en el Sistema de Administración Financiera SIAF-SICOIN-WEB. Cuando sean fondos de Préstamo BID 1905/OC-GU es responsabilidad de la Unidad Ejecutora cumplir con esta norma.

DÉCIMO OCTAVO: DE LOS INTERESES. Los intereses que generen las cuentas de depósitos monetarios mantenidas en el sistema bancario al principio del año dos mil catorce e incorporados dentro del presupuesto de ingresos y egresos de la institución por medio de Acuerdo de Dirección General. Los intereses devengados, deberán ser registrados contablemente en el siguiente mes calendario en el que fueron percibidos, registrándose su totalidad dentro del periodo para efectos del cierre presupuestario. Cuando correspondan a los generados por recursos del Préstamo BID 1905/OC-GU, es responsabilidad de la Unidad Ejecutora cumplir con esta norma y las del ente cooperante.

DÉCIMO NOVENO: FONDOS PRIVATIVOS. Los ingresos por conceptos de fondos privativos, así como el pago por posibles siniestros incluidos en las coberturas de las pólizas de seguros, deberán ser estimados e incorporados al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal Dos mil Catorce, mediante acuerdo de Dirección General. Al momento de percibirse ingresos por estos conceptos, deberán registrarse contablemente a través de la elaboración del Formulario 63 "A", y el ingreso contable respectivo mediante el CUR correspondiente. En el caso de operaciones generadas por la ejecución del Préstamo BID 1905/OC-GU, es la Unidad Ejecutora del Préstamo quien cumplirá con esta norma, si procediere de conformidad a la autorización del BID.

VIGÉSIMO: CUENTAS DE DEPÓSITOS MONETARIOS. Con el propósito de agilizar la actividad financiera administrativa institucional, se autoriza el uso de las cuentas de depósitos monetarios en el Banco Crédito Hipotecario Nacional y Banco G&T Continental para obligaciones de pago y administrar el Fondo Rotativo interno y Cajas Chicas, conforme la Resolución JM-178-2002 de la Junta Monetaria, las cuales estarán registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN-WEB) del Instituto, y una cuenta corriente en el Banco de Guatemala, de conformidad con lo establecido en el Artículo cincuenta y cinco (55) del Decreto dieciséis guión dos mil dos, (16-2002), Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Los depósitos monetarios a los aprobados, deberán ser depositados en la cuenta de depósitos monetarios del Banco de Guatemala. Los saldos de estas cuentas bancarias deberán ser conciliados cada fin de mes.

En caso de las cuentas de depósitos monetarios del Préstamo BID1905/OC-GU, es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Préstamo cumplir directamente con esta norma.

VIGÉSIMO PRIMERO: INFORME DE BIENES. En los primeros quince días del mes de enero del año dos mil catorce, el Departamento Financiero a través de la Subsección de Inventarios, deberá enviar a la Dirección de la Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, el informe de los bienes propiedad de la institución con datos debidamente conciliados con la cuenta Propiedad, Planta y Equipo que aparece en el Balance General; cualquier diferencia por cuestiones de procedimiento de liquidación, deberá ser debidamente conciliado y efectuadas las aclaraciones pertinentes.

VIGÉSIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS. Queda prohibido que el Instituto de la Defensa Pública Penal, en calidad de entidad autónoma, que funciona con aportes provenientes del gobierno central, y fondos de Préstamo, realice depósitos a plazo fijo en cualquier institución del sistema bancario nacional u otras dependencias de carácter financiero.

VIGÉSIMO TERCERO: REGISTROS CONTABLES. Las operaciones contables que se realizan en la Sección de Contabilidad, deberán estar respaldadas con los documentos de legítimo abono correspondientes, a efecto de que los Estados Financieros presenten la situación financiera y económica de la institución de manera confiable a una fecha determinada. De igual forma la Unidad Ejecutora del Préstamo BID 1905/OC-GU debe cumplir con esta norma presupuestaria de forma directa, a efecto de disponer de información segregada y confiable.

VIGÉSIMO CUARTO: CONTRATACIONES DE PERSONAL. Todas las contrataciones de personal bajo los renglones presupuestarios 011, 022 y 029, deberán ser autorizadas por la Dirección General, de manera previa a que las personas empiecen a prestar sus servicios.

VIGÉSIMO QUINTO: DESTINO DE LOS EGRESOS. Los montos asignados en el presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, no obligan a la realización de los gastos correspondientes; estos deben efectuarse conforme a la medida en que se van cumpliendo con los objetivos, las metas programadas y de acuerdo a los aportes percibidos de la Administración Central. En caso del Proyecto del Préstamo BID 1905/OC-GU, su avance debe responder a los planes operativos aprobados de conformidad a las normas del ente cooperante.

VIGÉSIMO SEXTO: ECONOMÍAS PRESUPUESTALES EN EL GRUPO DE GASTO 0-SERVICIOS PERSONALES. Las economías presupuestales que se produzcan en los renglones de gasto del Grupo 0 - Servicios Personales- durante el transcurso del ejercicio fiscal dos mil catorce, podrán ser transferidas para financiar los casos siguientes:

- Pago oportuno de sueldos y salarios, honorarios técnicos y profesionales, prestaciones laborales y financiamiento de la política salarial.
- Financiar el pago de prestaciones originadas por el cese de la relación laboral del personal.
- Reestructuraciones organizacionales, vinculadas al proceso de modernización y actualización de la Defensa Pública Penal.
- Establecimiento del pago de bonos de diferente índole para contrarrestar los efectos negativos de los procesos inflacionarios que se vienen produciendo a nivel nacional.
- Gastos de funcionamiento o de inversión, siempre y cuando las economías se originen de créditos presupuestarios no comprometidos, ni devengados o de la supresión de puestos.
- En caso del proyecto del Préstamo BID 1905/OC-GU conforme las normas convenidas y aprobadas con el cooperante y regulaciones aplicables y estas normas.

VIGÉSIMO SEPTIMO: MODIFICACIONES DE ESCALAS SALARIALES, COMPLEMENTOS SALARIALES, BONOS Y OTROS BENEFICIOS MONETARIOS PARA LOS TRABAJADORES. Todas las medidas y disposiciones que modifiquen las escalas salariales, complementos salariales, bonos y cualquier beneficio monetario para los trabajadores del Instituto de la Defensa Pública Penal, deben de realizarse dentro del monto del presupuesto aprobado, sus modificaciones y ampliaciones para el ejercicio fiscal dos mil catorce, deberán ser aprobados por Dirección General.

VIGÉSIMO OCTAVO: PAGO POR SERVICIOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, transporte, arrendamientos y cuotas de seguridad social deben ser pagados puntualmente por el Departamento Administrativo de la División Administrativa Financiera; los Coordinadores Departamentales y/o Municipales son responsables de velar porque el pago de estos servicios se mantenga al día en sus unidades o dependencias de trabajo.

VIGÉSIMO NOVENO: EGRESOS PRESUPUESTALES. Como requisito previo a autorizar cualquier egreso, específicamente, la Dirección de la División Administrativa Financiera, el Departamento Administrativo, el Subjefe Administrativo, el Departamento Financiero, el Director Ejecutivo y de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Humanos, la Unidad Ejecutora del Préstamo BID 1905/OC-GU y la Auditoría Interna, según corresponda a cada uno, deben velar por el cumplimiento de todos los procedimientos y requisitos que establecen:

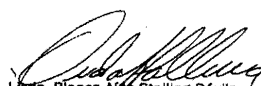
- El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
- El Acuerdo No. 1058-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificaciones.
- El Decreto No. 129-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio Público de la Defensa Pública Penal.
- El Acuerdo No. 04-99, Reglamento del Instituto de la Defensa Pública Penal.
- El Acuerdo Gubernativo No. 80-2004 que regula el uso de sistemas de información sobre contrataciones y adquisiciones del estado, denominado "GUATECOMPRAS".
- El Acuerdo Ministerial número 386-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas de Normativa legal emitida, referente a los mecanismos de transparencia y las contrataciones del estado que el sistema de información sobre contrataciones y adquisiciones del estado "GUATECOMPRAS".
- La Resolución número 100 de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, que emite las Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público "GUATECOMPRAS".
- Convenio de préstamos o donaciones.
- Otras disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a las contrataciones, adquisiciones y gastos que se efectúan con cargo al presupuesto de Egresos del Instituto, para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce.

TRIGÉSIMO: PROHIBICIÓN PARA ADQUIRIR COMPROMISOS SIN LA EXISTENCIA PREVIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS. Las unidades administrativas y Unidad Ejecutora que tienen a su cargo realizar compromisos, contrataciones de servicios y compras en general, deberán dar cumplimiento a lo estipulado por el Decreto número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto en esta materia y su reglamento. El presupuesto analítico de Egresos contiene el monto máximo a erogar para el ejercicio vigente, por lo que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios. Para subsanar la insuficiencia presupuestaria, se deberá proceder conforme lo dispuesto en el artículo décimo del presente acuerdo.

TRIGÉSIMO PRIMERO: DISPOSICIONES FINALES. Estas disposiciones legales reglamentarias y administrativas son aplicables a las contrataciones, adquisiciones y gastos que se ejecuten con cargo al presupuesto de egresos del Instituto de la Defensa Pública Penal para el ejercicio fiscal dos mil catorce.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: VIGENCIA. El presente Acuerdo de la Dirección General comprende del uno de enero del año dos mil catorce al treinta y uno de diciembre del mismo año, el cual deberá ser publicado en el Diario de Centro América.

Guatemala, 02 de enero de 2014.


Lidia Blanca Arce Stalling Dávila
Directora General
Instituto de la Defensa Pública Penal

(372344-2)-31-enero



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

EXPEDIENTE 3898-2012

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS

HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA, QUIEN LA PRESIDE, ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, MAURO RODERICO CHACÓN CORADO, CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ DE COLMENARES Y HÉCTOR EFRAÍN TRUJILLO ALDANA:

Guatemala, veintiséis de noviembre de dos mil trece.

Para dictar sentencia, se tiene a la vista la acción de inconstitucionalidad general

parcial promovida por la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario Judicial y Administrativo con Representación Hugo René Villalobos Herrarte, contra el numeral 95 de la literal A) del Acuerdo Municipal contenido en el Acta cero cero veintiocho - tres - dos mil doce (0028-3-2012), emitido por el Concejo Municipal de San José, departamento de Escuintla, el tres de marzo de dos mil doce y publicado en el Diario de Centro América el veintisiete de junio de dos mil doce, que establece un pago mensual de tres mil quetzales (Q.3,000.00) por "Posteado de Empresa Eléctrica por cada uno". La postulante actuó con el auxilio del profesional que la representa y de los abogados Francisco José Castillo Love y Ligia Elizabeth López Chupina. Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal III, Alejandro Maldonado Aguirre, quien expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN

La argumentación de la accionante, respecto de la normativa cuestionada de inconstitucionalidad, se resume: a) el poder tributario de conformidad con los artículos 171, inciso c), y 239 de la Constitución Política de la República corresponde con exclusividad al Congreso de la República, sustentado en los principios de legalidad, capacidad de pago, equidad y justicia tributaria; por su lado, las municipalidades únicamente tienen iniciativa para proponer al Organismo Legislativo la creación de arbitrios, pero no se les otorga poder tributario derivado o secundario sino, solamente una potestad para decretar tasas específicas por cada servicio público que presten a los correspondientes usuarios; b) las tasas de conformidad con lo que establece el artículo 255 constitucional, están sometidas a los principios de legalidad, equidad y justicia, las cuales a diferencia de los impuestos, retribuyen un servicio concreto o potencial, personal, correlativo, directo y voluntario que presta el Estado o por delegación de éste las municipalidades, cuyo rubro tiende a cubrir el costo del servicio; c) señala que la tasa y el arbitrio son diferentes debido a que este último de conformidad con el artículo 12 del

Código Tributario es decretado en beneficio de una o varias municipalidades, cuyo producto tiene un objetivo determinado y ningún otro órgano del Estado puede, sin incurrir en responsabilidad, distraer esos fondos para aplicarlos o invertirlos en una finalidad diferente de la que se hubiere previsto en la ley de su creación, en cambio la tasa se convierte en arbitrio cuando no está estructurada como retribución, como pago, por un servicio público municipal que reciba, como contraprestación, de modo inmediato, concreto, real, efectivo e individualizado el particular que lo requiere; d) como se ha señalado la tasa se origina por un acto voluntario, sin embargo, una entidad que presta el servicio de distribución final de electricidad conforme al artículo 46 de la Ley General de Electricidad y los artículos 65, 66 y 68 de su reglamento, tienen la obligación legal de proporcionar el suministro eléctrico a quien lo solicite, facultándole tal normativa a hacer uso de los bienes de dominio público, circunstancia que pone de manifiesto que no existe un acto voluntario que pueda dar origen al cargo municipal y que de otra manera no podría prestar los servicios de electricidad; e) los conceptos de servicios públicos y el de tasa tiene una imprescindible conexidad entre sí de conformidad con el Código Municipal, en el cual se aprecia que el fin primordial de las municipalidades es la prestación y administración de servicios públicos de las poblaciones bajo su jurisdicción territorial, de esa cuenta, cada servicio público municipal debe corresponder a una tasa y cada tasa habrá de corresponder con un servicio público municipal; f) señala que la norma impugnada crea un arbitrio que favorece a una municipalidad en concreto y en el caso de la distribución de energía eléctrica, la improcedencia resalta debido a que, por un lado, los artículos 13, 22 y 24 de la Ley General de Electricidad autorizan a las empresas que presten esos servicios el uso de los bienes de dominio público y permiten el tendido de líneas por calles y caminos, además de hacer referencia a las características del servicio de distribución final de energía eléctrica aduciendo que constituye uno de los factores insustituibles para mejorar la calidad de vida y cubrir necesidades primarias de la población, el desarrollo económico del país; g) argumenta que el servicio de distribución final de electricidad requiere de conformidad con la Ley General de Electricidad autorización gubernamental, cumpliendo el trámite establecido en los artículos 13 al 22 de tal normativa, procedimiento que culmina con la firma de un contrato de autorización celebrado con el Ministerio de Energía y Minas, el cual tiene como objeto la utilización de bienes de dominio público, además tomando en cuenta que la tarifa que se cobra a los usuarios del servicio de distribución de energía eléctrica tiene dos componentes i. el costo de adquisición o de suministro los cuales son trasladados íntegramente a los usuarios y ii. el Valor Agregado de Distribución que es la única retribución que percibe el distribuidor por el servicio que presta; h) el accionante señala que el Concejo Municipal quiso soslayar el criterio reiterado por esta Corte, contra el establecimiento de presuntas tasas, en este caso renta, por la tenencia de postes de Empresa Eléctrica, pagando tres mil quetzales mensuales lo cual no es más que un impuesto, sin tener las facultades para ello, por prohibírselo categóricamente el Magno Texto, por lo que el establecimiento de una pretendida tasa, con fines distorsionadores,

es irrazonable, riñe con el sentido común y da margen a la arbitrariedad en la administración pública; i) el **artículo 2 de la Constitución Política de la República** impone al Estado y a sus Municipalidades el deber de garantizar a los habitantes, entre otros valores, la seguridad jurídica la cual es una manifestación de la seguridad general contemplada en dicha norma; la disposición impugnada viola la misma porque proviene de un acto que no compete decretar al Concejo Municipal que invadió el ámbito de Congreso de la República, ya que el pago establecido constituye en realidad un auténtico arbitrio al no existir la contraprestación específica de servicio municipal alguno; j) el **artículo 134, inciso a), constitucional**, preceptúa que el municipio actúa por delegación del Estado, estableciendo entre sus obligaciones mínimas: coordinar su política con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del ramo a que corresponda. En esa virtud, debe haber coherencia y compatibilidad entre ambas políticas, evitando, en beneficio de la población, que entre ellas surjan contradicciones. La propia Constitución ha calificado el servicio de energía eléctrica como de urgencia nacional -artículo 129-, por ser un recurso indispensable para lograr una mejor calidad de vida, determinándose el precio de su prestación por los procedimientos que contempla la Ley General de Electricidad y su Reglamento, respecto del cual el Estado ha delineado una política de subsidio para que los pequeños consumidores residenciales paguen menos por kilowatio-hora que los otros sectores de consumo. Por lo que, la imposición de un gravamen como el que se impugna, no previsto ni previsible al momento de suscribir el contrato administrativo correspondiente, decretado, por un órgano que carece de competencia para ello, implica una grave descoordinación y falta de coherencia entre la política municipal y la estatal, específicamente la del ramo energético, a cargo de Ministerio de Energía y Minas, con la agravante de que por ley el importe de la llamada tasa se debe cargar íntegramente a la tarifa que se cobra al usuario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 82, inciso d), del reglamento, por lo que la falta de congruencia entre ambas políticas surge por la emisión de la norma impugnada por parte del Concejo Municipal, de tal suerte que esa disposición, por contravenir un claro mandato constitucional no es apta para conservar su vigencia en el ordenamiento jurídico; k) señala la incompatibilidad que existe entre la norma impugnada con el **primer párrafo del artículo 152 constitucional**, el cual contiene el principio de legalidad de las funciones públicas y establece que el poder proviene del pueblo y su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y las leyes, lo que significa que una manifestación del mismo es el poder tributario que no compete ejercerlo a las municipalidades por cuanto éstas carecen de él y tienen a cambio una potestad legal circunscrita al establecimiento de tasas, no de impuestos; l) la **literal c) del artículo 171 de la Constitución Política de la República**, se trasgrede, en virtud

que, el mismo reserva con exclusividad, el poder de decretar impuestos ordinarios y extraordinarios al Congreso de la República y en el presente caso el Concejo Municipal al emitir la normativa impugnada, la cual constituye un típico arbitrio, se atribuyó una competencia que no le correspondía y ejerció ilegalmente el poder tributario que el Texto Constitucional le asigna de modo exclusivo y excluyente al Organismo Legislativo;

m) denuncia la accionante que la norma cuestionada infringe el **artículo 175 constitucional**, el cual desarrolla el principio de jerarquía del ordenamiento jurídico guatemalteco, en virtud que de conformidad con el contrato celebrado con la administración pública, con base en el Acuerdo del Ministerio de Energía y Minas, se le reconoció el derecho para que haga uso de bienes de dominio público o de uso común - calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean en propiedad privada-, lo cual proviene de la autorización que confieren los artículos 13, 22 y 24 de la Ley General de Electricidad y 17 de su reglamento, los cuales son normas de superior jerarquía jurídica a la norma objetada, derivándose con ello la incompatibilidad que se denuncia y con ello la vulneración constitucional que se invoca; n) el **primer párrafo del artículo 239** constitucional desarrolla el poder tributario del Congreso e impone el principio de legalidad que reserva con exclusividad a tal Organismo la potestad de decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales así como fijar las bases de recaudación, en congruencia con lo establecido en el primer párrafo del **artículo 246** del texto constitucional, por tal razón, en la disposición objetada, su ente emisor se atribuyó una competencia que no le corresponde, al carecer del poder tributario que la Constitución asigna al Congreso de la República. Por otro lado, señala que el principio de legalidad en materia tributaria únicamente está contemplado para las municipalidades en el caso de las tasas, por cuanto el **artículo 255 constitucional** dispone que en la captación de recursos, las municipalidades deben ajustarse al principio de legalidad que exige el artículo 239 de la Constitución Política de la República. Solicitó que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad promovida.

II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

Se decretó la suspensión provisional del numeral 95 de la literal A) del Acuerdo Municipal contenido en Acta cero cero veintiocho - tres - dos mil doce (0028-3-2012), emitido por el Concejo Municipal de San José, departamento de Escuintla, el tres de marzo de dos mil doce. Se tuvo como intervinientes al Concejo Municipal de San José, departamento de Escuintla y al Ministerio Público. Oportunamente se señaló día y hora para la vista.

III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) El **Ministerio Público** señaló: I) que la norma impugnada, efectivamente como el accionante lo argumentó, viola el artículo 239 constitucional, puesto que el ente emisor invadió la esfera de las atribuciones del Congreso de la República. Además que los

cobros allí establecidos no cumplen con las características que las pueden identificar como tasas, es decir, que su pago fuese un acto voluntario del obligado y que el particular recibe una contraprestación por un servicio público y, II) las municipalidades no pueden instaurar por vía de reglamentos impuestos, por tal razón, la normativa impugnada contraría los artículos 154 y 239 constitucionales. Por lo que, estima que la exacción dineraria prevista en la normativa impugnada, no tiene sustento constitucional y por el contrario, vulnera los artículos 2º, 134 inciso a), 152, primer párrafo, 171, inciso c), 175, 239, primer párrafo, 243 y 255, constitucionales. Solicitó que se declare con lugar la acción de Inconstitucionalidad planteada. B) el **Concejo Municipal de San José, departamento de Escuintla** no evacuó la audiencia.

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

A) La **entidad postulante** ratificó los argumentos legales invocados en su escrito de interposición. Solicitó que se declare con lugar la acción planteada. B) El **Ministerio Público** reiteró lo expuesto al evacuar la audiencia conferida. Solicitó que se declare con lugar la garantía instada. C) El **Concejo Municipal de San José, departamento de Escuintla**, no alegó.

CONSIDERANDO

- I -

Es función esencial de esta Corte, la defensa del orden constitucional, siendo el órgano competente para conocer de las acciones promovidas contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general objetadas total o parcialmente de inconstitucionalidad.

En su labor, con el único objeto de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento guatemalteco, procede al estudio analítico requerido, a fin de determinar si la norma impugnada contraviene o no las disposiciones de aquella. En ese sentido, de evidenciar tal contradicción, deberá proceder a la declaratoria respectiva, quedando sin vigencia la norma inconstitucional; caso contrario, de no apreciar el vicio denunciado, la desestimación de la pretensión deviene imperativa.

- II -

En ejercicio de la autonomía que los artículos 253 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantizan a los municipios, estos tienen la facultad de obtener y disponer de sus recursos, para lo cual deben administrar sus intereses, atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y procurar el fortalecimiento económico de sus municipios para poder realizar las obras y prestar servicios a los vecinos. La captación de sus recursos debe ajustarse a lo establecido en el artículo 239 de la Ley Suprema, a la ley ordinaria y a las

necesidades de su circunscripción territorial. Esta norma consagra el principio de legalidad en materia tributaria, que garantiza que la única fuente creadora de tributos debe ser la ley, estableciendo que es potestad exclusiva del Congreso de la República decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, así como la determinación de las bases de recaudación de estos tributos.

De conformidad con los artículos 11 y 12 del Código Tributario, impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente, y arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. La tasa, cuya creación es competencia de las corporaciones municipales, según la ya reiterada jurisprudencia de esta Corte, es *"...la cuota-parte del costo de producción de los servicios públicos indivisibles, que el poder público obtiene legalmente de los particulares según su individual y efectivo consumo de tales servicios..."* (Sentencias de diecisiete de agosto de dos mil once y seis de diciembre de dos mil once, dictadas en los expedientes trescientos cuarenta y tres – dos mil once [343-2011] y novecientos sesenta y uno – dos mil once [961-2011]); y para su fijación deben observarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad, aunque constituya una facultad discrecional. Además, este Tribunal describió las principales características de las tasas: *"...a) se pagan por el disfrute real o potencial de un servicio. Las entidades estatales las pueden cobrar a cada particular en la medida que recibe el servicio o porque, aunque no se tenga interés en él, representa un beneficio potencial; b) es semejante al impuesto pues lleva implícita la coerción sobre el que esté obligado a pagarla, en la medida en que se constituya como beneficiario -directo o indirecto- del servicio; c) deben elaborarse tomando en cuenta el costo efectivo del servicio más un porcentaje de utilidad para el desarrollo; d) los recursos generados sólo pueden ser destinados a la financiación de gastos del servicio público; e) los contribuyentes son identificados con relativa facilidad; f) queda a juicio de la entidad respectiva el método de distribución de los costos de servicio..."*; en concreto, la tasa debe ser establecida en proporción al costo del servicio que se presta, pues lo recaudado debe destinarse para la restitución de los egresos efectuados.

Es precisamente este elemento -el servicio público municipal o el beneficio, relacionado concretamente con el contribuyente- el que constituye el hecho imponible de la tasa, lo que la distingue del arbitrio que contiene una actividad general no relacionada específicamente con el ciudadano.

Por su parte, el Código Municipal, en su artículo 35, literal n), atribuye al Concejo Municipal la potestad de fijar rentas de los bienes municipales, sean éstos de uso común o no, la de tasas por servicios administrativos y tasas por servicios públicos locales, entre otros cobros, producto que constituye ingresos del municipio, de conformidad con el artículo 100 del referido Código y señala que para el caso de aprovechamiento

privativo de bienes municipales de uso común, la modalidad podrá ser a título de renta, servidumbre de paso o usufructo oneroso.

Por otro lado, el artículo 72 del mismo cuerpo legal indica que también le corresponde al municipio regular y prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción territorial, así como la determinación y cobro de tasas, fijadas atendiendo a los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios. Ello se complementa con lo dispuesto en el artículo 101 del Código mencionado, el cual establece que la obtención y captación de recursos para el fortalecimiento económico y desarrollo del municipio y para realizar las obras y prestar los servicios que se necesiten deben ajustarse al principio de legalidad.

Con fundamento en estas normas se concluye que todo aquel que pretenda utilizar bienes públicos de determinado municipio, con fines de lucro, debe obtener la autorización del ente municipal y establecer con ésta una relación jurídica de intercambio por el aprovechamiento particular de un bien colectivo a cambio de un pago periódico durante el tiempo de uso exclusivo.

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, en materia de electrificación nacional, el artículo 129 constitucional regula tres aspectos: a) la declaratoria de urgencia nacional de la electrificación del país; b) la obligación del Estado y municipalidades de formular planes de electrificación; y c) la participación en la actividad de electrificación del Estado y la iniciativa privada.

La Ley General de Electricidad, Decreto 93-96 del Congreso de la República, regula la forma en que debe desarrollarse la producción de energía eléctrica como industria básica nacional y las formas en que deben realizarse las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, obedeciendo a los principios de libre generación, transporte y fijación de precios de la electricidad, sin necesidad de autorización o condición previa por parte del Estado, salvo en los casos que sea necesario utilizar bienes de dominio público (artículo 1º); la instalación de centrales generadoras (artículo 8); lo relativo a la autorización por parte del Ministerio de Energía y Minas para realizar estudios de proyectos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica (artículo 11); que se entiende por autorización a aquélla *"mediante la cual se faculta al adjudicatario para que utilice bienes de dominio público..."*, quienes pueden solicitarla y las facultades que tendrán los adjudicatarios de dichas autorizaciones (artículos 13, 14 y 22); lo relativo a la constitución de servidumbres, la duración de éstas, los derechos que conlleva su constitución y las obligaciones relacionadas (artículos 27, 28, 31 y 32); la declaración judicial de la constitución de servidumbres (artículo 43); lo referente a que el Administrador del Mercado Mayorista coordinará, sin fines de lucro, las operaciones de centrales

generadoras y establecimiento de precios de mercado, cuyo funcionamiento se regirá por la ley (artículo 44); lo concerniente a la transferencia de derechos para la prestación de servicios (artículo 58) y lo atinente al pago de peajes por uso de instalaciones de transmisión y transformación principal y secundarios (artículo 54).

Con esta base legal y, dada la importancia del suministro de la energía eléctrica para el país, se ha regulado por medio de dicha normativa -Ley General de Electricidad y su Reglamento- el uso de bienes públicos de uso común, para actividades especiales, como lo es la instalación de infraestructura aérea o subterránea para la transmisión de los servicios de energía eléctrica; siendo con base en ella, que al acordar una autorización se emite el Acuerdo Gubernativo y se suscribe el contrato que corresponde.

- III -

En el presente caso, Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, promueve inconstitucionalidad general parcial objetando el numeral 95 de la literal A) del Acuerdo Municipal contenido en el Acta cero cero veintiocho – tres – dos mil doce (0028-3-2012), emitido por el Concejo Municipal de San José, departamento de Escuintla, el tres de marzo de dos mil doce y publicado en el Diario de Centro América el veintisiete de junio de dos mil doce, que establece un pago mensual de tres mil quetzales (Q.3,000.00) por *"Posteado de Empresa Eléctrica por cada uno"*.

La entidad accionante señala que tal disposición transgrede los artículos 2º, 134, inciso a), 152, primer párrafo, 171, inciso c), 175, 239, primer párrafo, 243 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al estimar que la misma: i) viola los principios de seguridad jurídica, de legalidad de las funciones públicas y de legalidad en materia tributaria, al derivarse de un órgano estatal que carece de facultad para emitirla, invadiendo con ello, el ámbito de competencia que el Magno Texto le otorga con exclusividad al Congreso de la República, pues el pago establecido constituye un arbitrio, al no existir la contraprestación específica de servicio municipal alguno; ii) además, la Constitución Política de la República ha calificado el servicio de energía eléctrica como de urgencia nacional -artículo 129-, por ser ésta un recurso indispensable para lograr una mejor calidad de vida, determinándose el precio de tal servicio por los procedimientos que contempla la Ley General de Electricidad y su Reglamento, por lo que, la imposición de un gravamen como el que se impugna, implica una grave descoordinación y falta de coherencia entre la política municipal y la estatal, específicamente la del ramo energético, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, con la agravante de que por ley el importe de la llamada tasa se debe cargar íntegramente a la tarifa que se cobra al usuario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 82, inciso d), del reglamento, por lo que la falta de congruencia entre ambas políticas surge por la emisión de la norma impugnada por parte del Concejo Municipal; iii) la tasa se origina por un acto voluntario, pero en el caso de una empresa que presta el servicio de distribución

final de electricidad conforme a la Ley General de Electricidad y su reglamento, ésta tiene la obligación legal de proporcionar el suministro eléctrico a quien lo solicite, otorgándole para el efecto autorización para que haga uso de los bienes de dominio público por lo que no existe un acto voluntario sino obligatorio, pues de otra manera no podría prestar los servicios de electricidad; iv) infringe el principio de jerarquía del ordenamiento jurídico, en virtud que de conformidad con el contrato celebrado con la administración pública y con base en el Acuerdo del Ministerio de Energía y Minas, se le reconoció el derecho para que haga uso de bienes de dominio público o de uso común -calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean en propiedad privada-, lo cual proviene de la autorización que confieren los artículos 13, 22 y 24 de la Ley General de Electricidad y 17 de su reglamento normas de superior jerarquía jurídica que la objetada, derivándose con ello la incompatibilidad que se denuncia y con ello la vulneración constitucional que se invoca.

Sobre el particular, esta Corte ha considerado que es indiscutible que al tenor de los artículos 253 y 255 de la Constitución, los municipios tienen la facultad de obtener y disponer de sus recursos, debiendo, procurar el fortalecimiento económico de sus municipios para poder realizar las obras y prestación de servicios a los vecinos. Por ello, el artículo 35, literal n), del Código Municipal otorga al Concejo Municipal la función de administrar los bienes bajo su jurisdicción y la facultada -como autoridad autónoma- de fijar la renta por el uso de bienes municipales sean éstos de uso común o no; debiendo emitir para el efecto, las ordenanzas y reglamentos sobre el ordenamiento territorial de su jurisdicción y para ejercer el gobierno y la administración de sus recursos patrimoniales.

Sin embargo, para el caso específico de las operaciones comerciales relacionadas con el transporte de energía eléctrica, mediante la colocación de postes y líneas de conducción, la Ley General de Electricidad, establece en la literal c) del artículo 1º, que *"...el transporte de electricidad que implique la utilización de bienes de dominio público y el servicio de distribución final de electricidad, estarán sujetos a autorización"*, última que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley del Organismo Ejecutivo, es competencia del Ministerio de Energía y Minas. Consecuentemente, la autorización de la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica, debe realizarse conforme a la Ley específica; tal autorización faculta al adjudicatario para que utilice bienes de dominio público, constituyendo para el efecto las servidumbres que se deban imponer en predios de propiedad pública o privada, lo cual implica, según lo contenido en la literal b) del artículo 31 de la ley de la materia, el derecho de estos a colocar postes y torres, tender cables aéreos o subterráneos y colocar las demás estructuras que sean necesarias para la prestación del servicio. En ese sentido, la Ley *ibidem* regula en el artículo 24 que *"Las*

líneas de conducción de energía eléctrica podrán cruzar... calles, caminos y otras líneas eléctricas... debiéndose diseñar las instalaciones de tal manera que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes, así como la prestación de los servicios. El cruce de líneas de transmisión de energía eléctrica de calles, caminos y carreteras no se considerará, como utilización de bienes de dominio público...; por lo anterior, se considera contrario al principio de legalidad, implícito en el artículo 239 constitucional, el contenido de la disposición municipal impugnada, en virtud de regirse por normativas especiales -Ley General de Electricidad y su reglamento-, de donde se determina que no constituye facultad del Concejo Municipal la fijación de tasas sobre la instalación de postes para fluido eléctrico, puesto que esa facultad no encaja en la naturaleza y objeto que rige a los municipios, tal y como es desarrollado por el Código Municipal, -salvo regular y autorizar los lugares en donde esos "postes" serán colocados, siempre y cuando ello no haga inviable la prestación de tal servicio-, por lo que no puede cambiarse por medio de un acuerdo municipal las condiciones señaladas por la ley, porque de lo contrario, se estaría violando la certeza y seguridad jurídica y el orden jerárquico de las leyes, ya que en la gradación de las normas jurídicas administrativas que integran nuestro sistema legal, se encuentra en la cúspide la Constitución Política de la República, seguida por las leyes constitucionales y luego las ordinarias, que deben prevalecer frente a otras disposiciones de inferior jerarquía, cuando entre ellas se denuncie colisión.

Lo expuesto denota que el Concejo Municipal relacionado, al emitir la disposición cuestionada, invadió el ámbito de competencia del Congreso de la República, al establecer un cobro sobre una actividad determinada, sin que exista una contraprestación referente al mismo y, por el contrario, se denota la simple finalidad de gravar la misma a efecto de generar la percepción de fondos por parte de la referida municipalidad, por lo que tal pago no se genera de manera voluntaria, sino coactiva, pues si lo pretendido es extraer dinero del particular por actividades que no constituyen servicios municipales, las exacción pretendida debe establecerse por medio de los tributos, pero, por el ente exclusivamente facultado para ello, aspecto que vulnera los artículos 2º, 171, literal c), 175 y 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que, deviene inconstitucional y así deberá declararse.

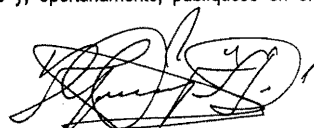
Por las razones indicadas en el presente fallo, se considera innecesario emitir pronunciamiento sobre los demás argumentos de la acción.

LEYES APLICABLES

Artículos citados, 267 y 272, inciso a), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 115, 133, 141, 143, 148, 163, inciso a), 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 31 y 34 Bis del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I. **Con lugar** la inconstitucionalidad del numeral 95 de la literal A) del Acuerdo Municipal contenido en el Acta cero cero veintiocho – tres – dos mil doce (0028-3-2012), emitido por el Concejo Municipal de San José, departamento de Escuintla, el tres de marzo de dos mil doce y publicado en el Diario de Centro América el veintisiete de junio de dos mil doce, que establece un pago mensual de tres mil quetzales (Q.3,000.00) por "Posteado de Empresa Eléctrica por cada uno". II. Los efectos del presente fallo se retrotraen al doce de octubre de dos mil doce, fecha en la que se publicó en el Diario de Centro América la suspensión provisional del rubro indicado en esta sentencia como inconstitucional. III. Notifíquese y, oportunamente, publíquese en el Diario de Centro América.


HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA
PRESIDENTE


ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE
MAGISTRADO


MAURO RODERICO CHACÓN CORADO
MAGISTRADO


CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ DE COLMENARES
MAGISTRADA


HÉCTOR EFRAÍN TRUJILLO ALDANA
MAGISTRADO


MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

(E-110-2014)-31-enero



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RESOLUCIÓN CNEE-35-2014

Guatemala, 30 de enero de 2014

LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4 de la Ley General de Electricidad, establece que es función de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entre otras, la de cumplir y hacer cumplir la Ley General de Electricidad y sus reglamentos, en materia de su competencia e imponer sanciones a los infractores; velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios y concesionarios, proteger los derechos de los Usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre competencia, así como prácticas abusivas o discriminatorias; definir las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación de acuerdo a la ley, así como la metodología para el cálculo de las mismas.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 71 de la Ley General de Electricidad estipula que las tarifas a consumidores finales del servicio de distribución final, serán calculadas por la Comisión y que el Reglamento de la Ley General de Electricidad en los artículos 80 y 95 establecen que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica cada cinco años fijará las tarifas, sus fórmulas de ajuste, las estructuras tarifarias, así como los cargos por corte y reconexión para Usuarios del Servicio de distribución final y estos tendrán una vigencia de cinco años; y toda vez que el actual pliego tarifario de Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, fijado por medio de las resoluciones CNEE-23-2009 y CNEE-24-2009, de la Tarifa Social y Tarifa No Social, respectivamente, vencen el treinta y uno de enero del año dos mil catorce, es necesario poner en vigencia uno nuevo.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 99 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, preceptúa que: "...En ningún caso, la actividad de Distribución Final, del servicio de electricidad, puede llevarse a cabo sin pliego tarifario vigente. Dada la circunstancia en la que una Distribuidora no cuente con un pliego tarifario, corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, emitir y poner en vigencia un pliego tarifario de manera inmediata de forma que se cumpla con el principio ya enunciado."; y siendo el caso que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica emitió la resolución CNEE-33-2014, y ante el vencimiento del pliego fijado por medio de las resoluciones CNEE-23-2009 y CNEE-24-2009, corresponde seguir aplicando la misma estructura tarifaria contenida en dichas resoluciones, a efecto que la Distribuidora cuente con un pliego tarifario vigente.

POR TANTO:

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con base en lo considerado y la normativa citada,

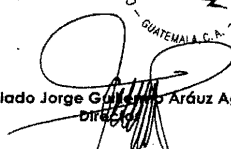
RESUELVE:

- I. Emitir y poner en vigencia para Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, el mismo pliego tarifario fijado por medio de las resoluciones CNEE-23-2009 y CNEE-24-2009, correspondientes a los usuarios de la Tarifa Social y Tarifa No Social, respectivamente.
- II. Que Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, deberá aplicar lo establecido en el numeral I de la presente resolución, hasta que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, publique las tarifas definitivas para el quinquenio correspondiente, dentro del plazo que no podrá exceder de nueve meses.
- III. **PUBLÍQUESE.-**


Licenciada Carmen Urizar Hernández
Presidente




Licenciada Silvia Ruth Alvarado Silva de Córdova
Directora


Licenciado Jorge Guillermo Aráuz Aguilar
Director


Licenciado Juan Rafael Sánchez Cortés
Secretario General


Lic. Juan Rafael Sánchez Cortés
Secretario General
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

(372538-2)-31-enero


**COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

RESOLUCIÓN CNEE-36-2014

Guatemala, 30 de enero de 2014

LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4 de la Ley General de Electricidad, establece que es función de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entre otras, la de cumplir y hacer cumplir la Ley General de Electricidad y sus reglamentos, en materia de su competencia e imponer sanciones a los infractores; velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios y concesionarios, proteger los derechos de los Usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre competencia, así como prácticas abusivas o discriminatorias; definir las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación de acuerdo a la ley, así como la metodología para el cálculo de las mismas.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 71 de la Ley General de Electricidad estipula que las tarifas a consumidores finales del servicio de distribución final, serán calculadas por la Comisión y que el Reglamento de la Ley General de Electricidad en los artículos 80 y 95 establecen que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica cada cinco años fijará las tarifas, sus fórmulas de ajuste, las estructuras tarifarias, así como los cargos por corte y reconexión para Usuarios del Servicio de distribución final y estos tendrán una vigencia de cinco años; y toda vez que el actual pliego tarifario de Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, fijado por medio de las resoluciones CNEE-21-2009 y CNEE-22-2009, de la Tarifa Social y Tarifa No Social, respectivamente, vencen el treinta y uno de enero del año dos mil catorce, es necesario poner en vigencia uno nuevo.

CONSIDERANDO:

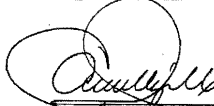
Que el artículo 99 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, preceptúa que: "...En ningún caso, la actividad de Distribución Final, del servicio de electricidad, puede llevarse a cabo sin pliego tarifario vigente. Dada la circunstancia en la que una Distribuidora no cuente con un pliego tarifario, corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, emitir y poner en vigencia un pliego tarifario de manera inmediata de forma que se cumpla con el principio ya enunciado."; y siendo el caso que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica emitió la resolución CNEE-34-2014, y ante el vencimiento del pliego fijado por medio de las resoluciones CNEE-21-2009 y CNEE-22-2009, corresponde seguir aplicando la misma estructura tarifaria contenida en dichas resoluciones, a efecto que la Distribuidora cuente con un pliego tarifario vigente.

POR TANTO:

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con base en lo considerado y la normativa citada,


RESUELVE:

- I. Emitir y poner en vigencia para Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, el mismo pliego tarifario fijado por medio de las resoluciones CNEE-21-2009 y CNEE-22-2009, correspondientes a los usuarios de la Tarifa Social y Tarifa No Social, respectivamente.
- II. Que Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, deberá aplicar lo establecido en el numeral I de la presente resolución, hasta que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, publique las tarifas definitivas para el quinquenio correspondiente, dentro del plazo que no podrá exceder de nueve meses.
- III. **PUBLÍQUESE.-**


Licenciada Carmen Urizar Hernández
Presidente





Licenciada Silvia Ruth Alvarado Silva de Córdova
Directora


Licenciado Jorge Guillermo Aráuz Aguilar
Director


Licenciado Juan Rafael Sánchez Cortés
Secretario General


Lic. Juan Rafael Sánchez Cortés
Secretario General
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

(372537-2)-31-enero


**Museo Nacional
de Etnografía y Folklore**

Horario de atención
para recorridos:
De 10 a 11 am y de 2 a 3 pm

Grupos, hacer reservación al:
2414 9600
extensión 182

**VEN A
CONOCER
LA HISTORIA**
de una de las imprentas más
antiguas de Centroamérica



La Comisión de Postulación integrada para presentar la nómina de cuarenta (40) candidatos, para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral

INFORMA

Que concluido el proceso de recepción de expedientes de postulantes al cargo de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, hace de conocimiento público que se recibieron noventa y siete 97 expedientes, que cumplieron con los requisitos de ley, que corresponden a los siguientes profesionales:

Columna Izquierda

ARABELA ELIZABETH CASTRO QUIÑONEZ
JOSE GABRIEL LARIOS OCHAITA
HUGO HAROLDO CALDERON MORALES
SERGIO ROLANDO FIGUEROA GODOY
HECTOR OVIDIO PEREZ CAAL
CINA ELIZABETH GUERRA GIORDANO
RAFAEL ALBERTO LOBOS MADRID
EDGAR ABEL LOPEZ SOSA
AMILCAR OLIVERIO SOLIS GALVAN
RAFAEL GARCIA LOPEZ
ANA ELLY LOPEZ OLIVA
ABRAHAM MENDEZ GARCIA
MARIO ISMAEL AGUILAR ELIZARDI
GUILLERMO ANTONIO PORRAS OVALLE
ROBERTO BELARMINO MENDEZ URIZAR
JORGE ANTONIO GARCIA MANCILLA
JOSE AQUILES LINARES MORALES
EDGAR OSVALDO AGUILAR RIVERA
LARRY MARK ROBLES GUIBERT
LUIS ALBERTO ZECEÑA LOPEZ
CARMEN YOLANDA MUÑOZ Y MUÑOZ
HILARIO RODERICO PINEDA SANCHEZ
DAVID SENTES LUNA
JULIO RENE SOLORZANO BARRIOS
LIZBETH YOLANDA BARREDA BARRIENTOS
VILMA TATIANA CABRERA ALVARADO
AUGUSTO ELEAZAR LOPEZ RODRIGUEZ
MARCO TULIO MELINI MINERA
MARCO TULIO MEJIA MONTERROSO
RAFAEL MORALES SOLARES
RUDY FEDERICO ESCOBAR VILLAGRAN
MARIO ANTONIO LUJAN MUÑOZ
ZULLY MORENO BARBIER
JOSE ANGEL DONALD GONZALEZ CUEVAS
JULIO ENRIQUE DOUGHERTY LIEKENS
MARIO ESTUARDO GORDILLO GALINDO
JORGE ROLANDO SEQUEN MONROY
NORMA JUDITH PALACIOS COLINDRES
GLADYS ELIZABETH MONTERROSO VELASQUEZ
ROSA ELIDA GUEVARA PINEDA
OLGA MARINA CHANG LOPEZ
FRANCISCO JOSE GARCIA CUYUN
HELDER ULISES GOMEZ
MARIA EUGENIA MIJANGOS MARTINEZ
MIRIAN EDITH CARDENAS CASTELLON
OSCAR RUPERTO CRUZ OLIVA
OSCAR RAFAEL PADILLA LARA
OSCAR EMILIO SEQUEN JOCOP

Columna Derecha

HUGO KERWIN RODRIGUEZ DIAZ
JORGE GONZALO CABRERA HURTARTE
CARLOS ENRIQUE CULAJAY CHACACH
RAMON DE JESUS SAENZ MORALES
ARTURO MARTINEZ GALVEZ
GUILLERMO AUSTREBERTO CARRANZA TARACENA
FAUSTO CORADO MORAN
MARCO ANTONIO CORTEZ SIS
LORENA ISABEL FLORES ESTRADA
MIGUEL ONASIS DE LEON ARGUETA
VICTOR MANUEL MOLINA FRANCO
JAIIME FERNANDO OSORIO ALONZO
ANGELA NORMA RIVERA MOLINA
MARIO RENE DIAZ LOPEZ
FERNANDO ESTEBAN CALVILLO CALDERON
OMAR RICARDO BARRIOS OSORIO
CESAR AUGUSTO CONDE RADA
PABLO ADOLFO LEAL OLIVA
ROSA HERLINDA ACEVEDO NOLASCO
ALBERTO ENRIQUE ESCOBAR FLORES
HECTOR ESTUARDO ORTIZ PELAEZ
JUAN JOSE RODAS MARTINEZ
ROSA MARIELLA JOSABETH RIVERA ACEVEDO
EDGAR ARMANDO CORDOVA PEREZ
BLANCA REBECA MORAN CASTRO
GERARDO ALBERTO HURTADO FLORES
EDGAR RAUL PACAY YALIBAT
HOMERO AVILA LIGORRIA
ARTURO SARAVIA ALTOLAGUIRRE
MARIA EUGENIA CASTELLANOS CRUZ
CARLOS RAFAEL CEREZO BLANDON
HECTOR ANIBAL DE LEON VELASCO
DELIA MARINA DAVILA SALAZAR
RONEL EMILIO ESTRADA ARRIAZA
VICTOR MANUEL ALVAREZ PINEDA
AXEL OTTONIEL MAAS JACOME
IRMA YOLANDA BORRAYO
LUIS ANIBAL BLANCO DE PAZ
MARIO FREDY SOTO RAMOS
ELVIA ESTER VELASQUEZ SAGASTUME
MOISES RAUL DE LEON CATALAN
IRMA ELIZABETH PALENCIA ORELLANA
GERMAN AUGUSTO GOMEZ CACHIN
ROALDO ISAIAS CHAVEZ PEREZ
LUIS EDUARDO LOPEZ RAMOS
ESTUARDO GAMALERO CORDERO
SILVIA VIOLETA DE LEON SANTOS
ROSA ORELLANA AREVALO
HUGO LEONEL MAUL FIGUEROA

En virtud de lo anterior se invita a las personas jurídicas o entidades que deseen pronunciarse en relación a cualquiera de los profesionales indicados, lo hagan por escrito, a la sede de la Comisión ubicada en el Salón Larrazábal, del Congreso de la República, los días lunes tres, martes cuatro y miércoles cinco de febrero del año en curso, en horario de 8:30 a 15:30 horas.

Finalmente, se comunica a los profesionales cuyos nombres aparecen indicados en la columna de la izquierda de esta publicación, que deben presentarse al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la novena avenida y novena calle nueve guión setenta y nueve de la zona uno, el día lunes tres de febrero de dos mil catorce, a las 7:30 A.M. para tomar la prueba psicométrica de competencias personales y profesionales que ha sido incluida por la Comisión como parte del proceso de evaluación de candidatos.

Los profesionales cuyos nombres aparecen en la columna de la derecha deberán presentarse al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la novena avenida y novena calle nueve guión setenta y nueve de la zona uno, el día lunes tres de febrero de dos mil catorce, a las 10:30 A.M. para tomar la prueba referida.

Dr. Estuardo Gálvez
Presidente de la Comisión

Lic. Roberto Moreno Godoy
Secretario de la Comisión

Guatemala, 31 de enero del 2014.